

Introducción: historia y responsabilidad

No es un capítulo de la historia de Estados Unidos del que estemos precisamente orgullosos.

Respuesta del secretario de Estado Colin Powell
ante una pregunta sobre la validez moral de la intervención
estadounidense en Chile, 20 de febrero de 2003.

Poco antes de la medianoche del 16 de octubre de 1998, dos agentes de Scotland Yard recorrieron las dependencias de una exclusiva clínica privada londinense y tomaron la habitación en la que el ex dictador chileno Augusto Pinochet se recuperaba de una operación de cirugía en la espalda. Con eficiencia británica, desarmaron a sus guardaespaldas privados, desconectaron todos los teléfonos, apostaron a ocho policías ante la puerta y pusieron al general al corriente de la orden de detención de la Interpol que pesaba sobre él. En cuestión de minutos, las autoridades del Reino Unido lograron así lo que se habían negado a hacer los tribunales chilenos desde 1990, año en que concluyó su régimen militar: detenerlo por crímenes contra la humanidad.

El general Pinochet, cuyo nombre había llegado a convertirse en sinónimo de flagrantes violaciones de los derechos humanos durante los diecisiete años que duró su dictadura, pasó quinientos cuatro días bajo arresto domiciliario en Londres, y sólo eludió ser extraditado a España y enfrentarse a un proceso por delitos que iban de la tortura al terrorismo gracias a la enérgica intervención diplomática del gobierno civil chileno, presionado por los militares pinochetistas y la hábil campaña propagandística que pusieron en marcha sus abogados. Tras dieciséis meses de arresto, las autoridades británicas dejaron en libertad al general, que a la sazón contaba ochenta y cuatro años, impulsadas por lo que llamaron «razones humanitarias». Al regresar a

su país, no obstante, el antiguo dictador se encontró desposeído de la inmunidad que impedía procesarlo, y las autoridades nacionales presentaron cargos en su contra y lo interrogaron. En determinado momento, Pinochet hubo de enfrentarse a la ignominiosa perspectiva de tener que imprimir sus huellas dactilares en una ficha policial y posar para ser fotografiado de frente y de perfil. Finalmente, los tribunales chilenos dictaminaron que padecía demencia senil y, por tanto, no podía ser juzgado por los abusos cometidos durante su régimen.

El general evitó así ser castigado, pero la epopeya del «caso Pinochet» sigue siendo un hito histórico en la persecución de los responsables de crímenes atroces. Su arresto supuso una reivindicación, largo tiempo esperada, no sólo de las víctimas de Pinochet, sino también de las víctimas de la represión en cualquier lugar del mundo. Asimismo, representó un momento decisivo en lo tocante al uso del derecho internacional para perseguir a los represores, un momento que siempre será recordado por haber transformado el movimiento de los derechos humanos y que constituye un punto de referencia tanto en Chile como en Estados Unidos.

En lo que a la causa de los derechos humanos se refiere, la historia de la detención de Pinochet ha establecido un precedente para la internacionalización de la justicia. Ahora que su caso ha conferido autoridad al concepto de jurisdicción universal —el poder de que dispone cualquier estado de hacer que quienes transgreden la ley se sometan a los códigos internacionales de justicia—, a los tiranos les va a ser imposible salir de su país con la seguridad de sentirse a salvo de la legislación internacional. Para Chile, el arresto del general acabó con su capacidad para reprimir la memoria colectiva de la nación en lo tocante a los horrores de su mandato e impedir que sus víctimas le exigiesen responsabilidades legales por los crímenes cometidos durante su régimen. Si bien ha eludido la justicia, Pinochet no se ha librado de ser juzgado. De hecho, algunos altos cargos militares de su gobierno han sido acusados, detenidos y encarcelados.

En tanto que los chilenos siguen resucitando y enmendando un pasado sangriento que permanecía enterrado, en Washington la detención de Pinochet ha desembocado en una gigantesca exhumación de archivos secretos del gobierno estadounidense. Al levantarse el secreto oficial que pesaba sobre el archivo Pinochet no sólo se ha renovado el interés internacional que despertaba la historia de su régimen, sino que la atención del público ha vuelto a dirigirse hacia la responsabilidad que tuvo Estados Unidos en el final de la democracia y el advenimiento de la dictadura en Chile.

EL OTRO 11 DE SEPTIEMBRE

Durante tres décadas, el 11 de septiembre ha sido un día de infausta memoria para los chilenos, los latinoamericanos en general y la comunidad internacional: fue el día en que los reactores del ejército del aire chileno atacaron el palacio de la Moneda de Santiago de Chile a modo de preludeo del brutal golpe de estado que elevó al poder a Pinochet. Hoy que tenemos tan reciente el 11 de septiembre de 2001, es más probable que la fecha sea recordada por los aterradores ataques terroristas contra el World Trade Center y el Pentágono, hecatombe que ha hecho que Estados Unidos y Chile compartan «esa fecha atroz», como la ha descrito con gran elocuencia el escritor Ariel Dorfman, «de nuevo un martes, de nuevo un 11 de septiembre de la muerte».

Con todo, la historia de Estados Unidos y la de Chile comparten mucho más que la coincidencia del día elegido por Osama bin Laden, dado el papel fundamental que representó Washington en el traumático pasado de Chile. En los albores de los sesenta, los estadistas norteamericanos dieron principio a más de una década de empeños por dirigir la vida política de Chile que culminaron en un intento encubierto de «derrocar» (la expresión era utilizada sin tapujos por Nixon y los miembros de su gabinete) el gobierno legítimo de la Unidad Popular, presidido por Salvador Allende. Pocas horas después de haberlo logrado, el 11 de septiembre de 1973, la Casa Blanca comenzó a transmitir mensajes confidenciales en los que felicitaba a Pinochet por su llegada al poder y expresaba su «deseo de cooperar con la Junta Militar y ayudar de cualquier modo que se estime oportuno». Hasta septiembre de 1976, fecha en que el general envió a un grupo de asesinos para perpetrar un acto de terrorismo internacional en la ciudad de Washington, el secretario de Estado Henry Kissinger mantuvo una firme postura de respaldo incondicional a su régimen. El asesinato de Orlando Letelier y Ronni Moffitt en las calles de la capital estadounidense dominó las relaciones entre ambos países durante la década siguiente, hasta que la dictadura comenzó a desmoronarse debido a la creciente presión popular chilena, y Estados Unidos abandonó por completo y de forma definitiva a su antiguo aliado anticomunista.

Y si este influjo sobre los acontecimientos de Chile es innegable, no es menos evidente que éstos han regresado ahora para influir a su vez en el discurso político de Estados Unidos (y del resto del mundo). El país que el poeta Pablo Neruda describió como un «largo pétalo de mar y vino y nieve» ocupa un lugar especial en los corazones y mentes de la comunidad internacional. Desde los albores del decenio de 1960, Chile ha atraído la atención internacional debido a toda una serie de proyectos políticos de naturaleza utópica, y diferentes experimentos económicos y sociales. En 1964, por ejemplo, se convirtió en el «escaparate» designado por la Alianza para el Progre-

so, programa estadounidense concebido para evitar movimientos revolucionarios en América Latina mediante el fortalecimiento de los partidos centristas democristianos de clase media. Sin embargo, la elección de Salvador Allende el 4 de septiembre de 1970 convirtió al país en la primera nación hispanoamericana que elegía de manera democrática a un presidente socialista. La «vía chilena al socialismo», el camino pacífico hacia la reforma socialista propuesto por Allende, cautivó la imaginación de las fuerzas progresistas de todo el planeta al tiempo que provocó la consternación de los estadistas de mentalidad imperialista de la Casa Blanca. «Nosotros establecemos los límites de la diversidad», se escuchó decir a Kissinger a sus subordinados cuando el gabinete de Nixon comenzó una serie de operaciones encubiertas en contra de Allende que, de acuerdo con un memorando secreto dirigido por Kissinger al presidente, «en el peor de los casos, garantizará su fracaso, y en el mejor, propiciará situaciones que harán más factible su posterior derrumbamiento o derrocamiento».

El marcado contraste entre el carácter pacífico del programa elaborado por Allende para conseguir el cambio y el violento golpe de estado que acabó con su vida y con la larga trayectoria de las instituciones democráticas del país no pudo menos de conmover al mundo. Las inclinaciones dictatoriales del régimen de Pinochet y su pésima actuación respecto de los derechos humanos no tardaron en convertirse en una cuestión política y humanitaria de la que se hablaba en todo el planeta. Cuando salió a la luz la implicación de la CIA en el derrocamiento de Allende y la frivolidad con que Washington había apoyado a la Junta Militar, la opinión pública mundial centró aún más la atención en Chile, hasta el punto de que a los estadistas de la Casa Blanca les resultó imposible seguir haciendo caso omiso de las críticas. «Chile ha asumido la imagen que tenía España en la década de 1940 como símbolo de tiranía de derecha —refirió a Kissinger uno de sus ayudantes en un informe secreto—. Se quiera o no, nos identifican con los orígenes del régimen y, por ende, nos atribuyen parte de la responsabilidad de sus actos.» La embajada estadounidense señalaba en un informe estratégico de 1974 clasificado como secreto:

Chile se ha convertido en una causa célebre tanto en el mundo occidental como en el comunista. Lo que está sucediendo en esta nación es, por lo tanto, una cuestión de especial importancia para Estados Unidos. Por distante y pequeño que sea, el país ha sido considerado desde hace mucho tiempo y de forma general como una zona en la que poder llevar a cabo experimentos económicos y sociales, y ahora se encuentra, en cierto sentido, en la primera línea del conflicto ideológico mundial.

En Estados Unidos, Chile fue a sumarse a Vietnam en calidad de motivo primordial de la batalla que se estaba librando en el país en torno a la co-

rrupción de los valores nacionales en el diseño y aplicación de su política exterior. A mediados de la década de 1970, lo que sucedía en Chile generó un debate de gran relevancia acerca de los derechos humanos, las acciones encubiertas y el lugar apropiado de unos y otras en la actuación de Estados Unidos en el extranjero. La indiferencia de Kissinger ante las atrocidades cada vez mayores de Pinochet consternó al público y llevó al Congreso a aprobar una legislación —que sentó precedente— para reducir la ayuda al régimen, y exigir una serie de criterios relativos a los derechos humanos a toda ayuda económica y militar estadounidense. Por otra parte, al revelarse la campaña secreta emprendida por la CIA con el objeto de, en primer lugar, impedir la elección de Allende y, después, desestabilizar su gobierno, elegido democráticamente, surgieron no pocos escándalos en relación con los servicios de inteligencia que obligaron por vez primera al país «a debatir y determinar el mérito de las operaciones secretas como instrumento de la política exterior estadounidense», en palabras del difunto senador Frank Church.

De hecho, Chile se convirtió en el acicate de la primera audiencia pública en torno a las acciones encubiertas. El Comité Selecto del Senado para el Estudio de Operaciones Gubernamentales Relacionadas con Actividades de Inteligencia —conocido como el «Comité Church»—, se embarcó en la primera investigación de importancia del Congreso acerca de operaciones encubiertas y publicó los primeros estudios que revelaban los detalles de tales acciones en el extranjero: *Covert Action in Chile, 1963-1973* y *Alleged Assassination Plots Involving Foreign Leaders*. Una vez dada a conocer, la campaña secreta emprendida en Chile por el gobierno llevó a que se descubriesen otros excesos, escándalos y casos de corrupción de la política exterior estadounidense.

Los hallazgos del Comité Church y la repulsión mostrada por el público ante la asociación de Washington con la brutalidad de Pinochet propiciaron la aparición de un movimiento generalizado que tenía por objeto reconciliar la política exterior de Estados Unidos con los preceptos morales de sus ciudadanos. «Para un buen número de personas de esta nación, Chile no es más que el último ejemplo de que Estados Unidos no está siendo fiel a sus valores», reconocía un memorando interno del Departamento de Estado en junio de 1975. El debate surgido en torno a la reprobable conducta seguida en Chile por el gobierno estadounidense dio lugar, tal como escribió Richard Harris en la revista *The New Yorker* en 1979, a una pregunta fundamental: «¿Cómo hemos podido convertirnos en semejante país?».

La pregunta no ha dejado de ser relevante para el debate mundial acerca del ejercicio del poder estadounidense en el siglo XXI. De hecho, al estudiar desde un punto de vista histórico las relaciones entre Estados Unidos y Chile nos encontramos con los mismos aspectos conflictivos a los que hubo de enfrentarse el pueblo estadounidense —así como la comunidad interna-

cional— cuando el gobierno de Bush declaró la guerra a Irak: un cambio de régimen, un ataque unilateral por parte de Estados Unidos, terrorismo internacional, asesinato político, soberanía, derechos humanos y muerte de inocentes. Después de tantos años, Chile sigue siendo un caso de estudio fundamental en lo tocante a la ética —o a su ausencia, para ser más exactos— de la política exterior estadounidense. «En lo que concierne a ... Chile en la década de 1970 —admitió el secretario de Estado Colin Powell cuando le preguntaron qué derecho tenía Estados Unidos de sentirse moralmente superior a Irak cuando Washington había respaldado el derrocamiento de la democracia chilena—, no es un capítulo de la historia de Estados Unidos del que estemos precisamente orgullosos.»

CHILE DESCLASIFICADO

A pesar de la importancia y notoriedad que ha tenido Chile en el debate, aún en curso, sobre la política exterior de Estados Unidos, los documentos históricos relacionados con su caso han permanecido en gran parte fuera del alcance del público. Las operaciones encubiertas, los asesinatos, los escándalos, los encubrimientos y las controversias relativas a las violaciones de los derechos humanos dieron lugar a ingentes cantidades de documentos del más alto secreto. Sin embargo, sólo un puñado de los cientos de papeles estudiados por los funcionarios pertenecientes al comité del Senado que investigó los hechos a mediados de la década de 1970 fue realmente desclasificado. En el proceso legal instruido contra Richard Helms, antiguo director de la CIA, por mentir ante el Congreso sobre las operaciones encubiertas efectuadas en Chile y en los pleitos civiles iniciados por las familias de las víctimas más famosas de Pinochet, Charles Horman, Orlando Letelier y Ronni Karpen Moffitt, se mencionaron miles de documentos referentes a las relaciones de Estados Unidos con el régimen del general durante el momento de mayor represión. No obstante, el gobierno se negó a hacerlos públicos, y los pocos que se sacaron a la luz estaban sometidos a una censura tan rigurosa (en muchos de ellos sólo eran legibles la fecha y el título) que resultaban inútiles para ser analizados con fines judiciales o históricos.

La detención de Pinochet en Londres volvió a despertar el interés, nacional e internacional, que se había concedido a los numerosos archivos secretos referentes a Chile que guardaba Estados Unidos. Se sabía que los informes confidenciales de la CIA, los cablegramas del Departamento de Estado, los análisis del Ministerio de Defensa y los memorandos del Consejo para la Seguridad Nacional, entre otros, contenían detallada información sobre las atrocidades de Pinochet, las entrañas de su sistema de represión interna y los actos de terrorismo internacional cometidos por su régimen, así como las

medidas adoptadas por Estados Unidos respecto de éste. Toda esta documentación hubiese proporcionado un buen cúmulo de pruebas para procesar al general y sus subordinados de haberse podido persuadir a la administración Clinton a levantar el secreto que pesaba sobre los miles de expedientes y las decenas de miles de páginas de información secreta recopilados durante la dictadura militar chilena.

La Casa Blanca ya había liderado un proceso de desclasificación de documentos estadounidenses en tiempos de Clinton con objeto de promover la causa de los derechos humanos. Durante su primer mandato presidencial, Clinton permitió que se hiciesen públicos secretos de gran relevancia sobre El Salvador, Honduras y Guatemala en respuesta a los escándalos por la censurable conducta y la represión que había protagonizado Estados Unidos en estos países. En lo relativo a Chile, el gobierno hubo de encararse con el coro de voces, tan enérgicas como conmovedoras, de los familiares de las víctimas estadounidenses de Pinochet, así como con la presión ejercida por un Congreso que exigía que se sacasen a la luz pruebas que pudieran respaldar los esfuerzos que estaba realizando España para llevar al general ante los tribunales. No fueron pocos los grupos, públicos y privados, defensores de los derechos humanos y del derecho a la información —entre los cuales se incluye el organismo al que pertenezco, el Archivo de Seguridad Nacional—,* que instaron a los funcionarios del gobierno a que hicieran públicos los documentos en nombre de los derechos humanos, la justicia y la historia.

Por diversas razones políticas, el gabinete de Clinton se resistió a emprender cualquier iniciativa que pudiese haber ayudado a España en su aplicación sin precedentes de la jurisdicción universal a los crímenes de Pinochet. El hecho de que se quedara de brazos cruzados, sin embargo, se entendió como un intento de proteger al más abyecto de todos los dictadores latinoamericanos que ha conocido la historia reciente. Por fin, el gobierno consintió en dirigir un «Proyecto de Desclasificación de Chile», aunque no con la intención de facilitar a España los documentos que necesitaba, sino por el bien de los ciudadanos chilenos y estadounidenses. Según anunció el Departamento de Estado en febrero de 1999, la investigación respondería «a los deseos explícitos» del Congreso y de las familias de las víctimas estadounidenses de Pinochet, y alentaría «en Chile un consenso capaz de dar un nuevo impulso al proceso de búsqueda de la verdad y la reconciliación».

El gobierno de Clinton hizo todo lo posible por aguijar al sistema establecido en torno a los secretos de Estado para que se divulgara una cantidad de información nada despreciable, y esto es algo que lo honra. El Departamento

* El National Security Archive es un instituto de la Universidad George Washington que custodia documentos políticos confidenciales una vez levantado el secreto que pesaba sobre ellos. (*N. del t.*)

mento de Estado, encabezado por Madeleine Albright, comprendió la necesidad de hacer públicos todos esos secretos de un modo exhaustivo con el fin de favorecer los derechos humanos y la honestidad histórica, y los Archivos Nacionales (encargados de los documentos presidenciales), el Consejo para la Seguridad Nacional, el Pentágono y el Ministerio de Justicia también colaboraron, por orden descendiente, en el proyecto. No obstante, los «segurócratas» de la CIA —el organismo que más documentación reveladora podía ofrecer, pero también el que más secretos deseaba mantener— mostraron una actitud particularmente obstinada. Durante meses, sus agentes trataron de ocultar todo documento que demostrase la implicación encubierta de Estados Unidos en el final de la democracia y el advenimiento de la dictadura en Chile. En 1999 se aprobó una enmienda especial de la Ley de Espionaje que le exigía presentar un informe por escrito al Capitolio, sede del Congreso, en el que se detallasen las operaciones encubiertas llevadas a cabo por la agencia (*CIA Activities in Chile*). Con todo, fue la considerable presión ejercida por el público —grupos de defensa de los derechos humanos, miembros clave del Congreso y funcionarios consagrados del poder ejecutivo, entre los que se incluía el propio presidente Clinton— lo que obligó a la CIA a abrir de forma parcial sus archivos secretos sobre los lazos clandestinos que mantenía Estados Unidos con la violencia del golpe de estado y, tras éste, con las instituciones militares y de policía secreta que, de forma sistemática, se encargaron de los distintos abusos que caracterizaron el régimen de Pinochet.

El Proyecto de Desclasificación de Chile produjo unos dos mil doscientos documentos de la CIA, a los que hay que sumar unos tres mil ochocientos de la Casa Blanca, el Consejo para la Seguridad Nacional, el Pentágono y el FBI, amén de los dieciocho mil del Departamento de Estado. Todo esto arrojó una luz considerable sobre los diecisiete años de la dictadura de Pinochet, así como sobre las acciones emprendidas en Chile por Estados Unidos y las posturas adoptadas al respecto entre 1970 y 1990. En total, el proyecto puso a disposición del público veinticuatro mil documentos que nunca antes se habían mostrado al público, lo que supone la divulgación de documentos más cuantiosa que haya efectuado el poder ejecutivo sobre cualquier país o asunto de política exterior.

Todos estos textos ofrecen una crónica de veinte años dramáticos y oscuros de política y operaciones estadounidenses en Chile, así como una amplia cronología de la feroz represión ejercida por Pinochet. Entre ellos se hallan —con el sello de SECRETO/DELICADO, CONFIDENCIAL, NODIS (no distribuir a otros organismos), NOFORN (no distribuir a otros países) y ROGER CHANNEL (prioridad máxima; difusión restringida), entre otras categorías de clasificación— memorandos de conversaciones (*memcons*) de la Casa Blanca, en los que se recogen los comentarios privados de los presidentes de Estados

Unidos y sus ayudantes; informes y directrices para la toma de decisiones preparados para Richard Nixon, Gerald Ford, Jimmy Carter y Ronald Reagan; minutas de reuniones sobre la estrategia de las operaciones encubiertas presididas por Henry Kissinger; informes de alto espionaje basados en confidentes de dentro del régimen de Pinochet; y cientos de comunicaciones —excesivamente censuradas pero no por ello menos reveladoras— de la Dirección de Operaciones de la CIA con sus agentes destinados en Santiago, que detallan una intensa actividad encubierta concebida para cambiar el curso de la historia de Chile.

De hecho, los documentos contienen información nueva acerca de casi todos los asuntos, episodios y escándalos de consideración que salpican esta controvertida historia. Entre los acontecimientos que aparecen en sus páginas se encuentran el Proyecto FUBELT, plan secreto de la CIA para impedir la llegada de Salvador Allende a la presidencia de Chile en otoño de 1970; el asesinato del comandante en jefe chileno René Schneider; la estrategia y las operaciones llevadas a cabo por Estados Unidos para desestabilizar el gobierno de Allende; la implicación de los estadounidenses en el golpe de estado; las ejecuciones de ciudadanos norteamericanos tras el golpe; los orígenes y operaciones de la DINA, la policía secreta de Pinochet; los lazos que unían a la CIA con Manuel Contreras, jefe de la DINA; la operación Cóndor; el asesinato de Orlando Letelier y Ronni Moffitt en un acto terrorista perpetrado con coche bomba en Washington D.C.; la muerte de Rodrigo Rojas, quien fue quemado vivo estando exiliado en Estados Unidos; y los intentos finales de Pinochet de frustrar la transición a un gobierno civil. Muchos de los documentos revelan, además de las atrocidades, los nombres de quienes las perpetraron, por lo que se han empleado —y siguen empleándose— para hacer avanzar las investigaciones judiciales relativas a las violaciones de los derechos humanos cometidas por los militares al mando de Pinochet y exigir responsabilidades por sus crímenes a los funcionarios del régimen.

Asimismo, están siendo útiles para revisar los análisis históricos del papel desempeñado por Estados Unidos en Chile. Para quienes estudian este período, los documentos exhumados ofrecen la oportunidad de conocer, con tanta exactitud como si hubiesen estado presentes, lo debatido por presidentes, consejeros de seguridad nacional, directores de la CIA y secretarios de Estado en torno a decisiones cruciales y órdenes capaces de cambiar el rumbo de una nación, así como de observar, minuto a minuto, día a día, cómo se pusieron en práctica estas órdenes en Chile. La comparación de lo que se dijo e hizo en secreto con las declaraciones, testimonios y memorias oficiales pone de manifiesto, de un modo tan detallado que no puede sino sorprendernos, la mendacidad inherente a la actitud política de Estados Unidos.

Los documentos permiten también reexaminar muchas de las preguntas pendientes acerca de esta historia, cuando no todas:

- ¿Qué función desempeñó en realidad Estados Unidos en el violento golpe de estado del 11 de septiembre de 1973 que llevó al poder a Pinochet?
- ¿Qué condujo al presidente Nixon y a su asesor de seguridad nacional, Henry Kissinger, a autorizar y supervisar la campaña diseñada para derrocar y socavar la democracia chilena?
- ¿Qué respaldo proporcionó la CIA de manera encubierta con objeto de ayudar a la consolidación del régimen de Pinochet? ¿Qué apoyo prestó la CIA a la DINA y sus asesinatos?
- ¿Fueron los funcionarios estadounidenses negligentes —o tal vez cómplices— en relación con la muerte de Charles Horman, ciudadano norteamericano detenido tras el golpe por los militares chilenos, cuyo caso constituye el tema central de la película *Missing* (Desaparecido)?
- ¿Qué sabía el servicio de inteligencia estadounidense acerca de la operación Cóndor, la red de servicios de inteligencia dirigida por Chile, que se extendía por el Cono Sur y organizó actos internacionales de terrorismo amparados por los diferentes estados de la región a fin de acabar con las críticas de que eran objeto sus regímenes?
- ¿Podían haber descubierto e impedido los funcionarios estadounidenses el atentado del 21 de septiembre de 1976, en el que murieron Orlando Letelier y Ronni Karpen Moffitt, y que constituyó el acto de terrorismo internacional más atroz cometido en Washington D.C. antes del ataque al Pentágono del 11 de septiembre de 2001?
- Y por último, ¿cuál fue el papel desempeñado por Washington en el final de la dictadura del general Pinochet?

EL ARCHIVO PINOCHET

Este libro es un intento de repasar la historia, tan compleja como controvertida, de la política de Estados Unidos en relación con la democracia y la dictadura chilenas. Los archivos secretos que se hicieron públicos a raíz de la detención de Pinochet representan todo un hallazgo de pruebas inéditas que van mucho más allá de lo que, a mediados del decenio de 1970, reveló el Comité Church sobre los intentos de Estados Unidos de desestabilizar el gobierno chileno elegido democráticamente. Los memorandos de la CIA (con títulos como «Chile: respaldo inicial tras el golpe» o «Reanudación del proyecto de la división del hemisferio occidental para el año fiscal de 1975») ponen de manifiesto la larga historia secreta de los empeños clandestinos de Estados Unidos por apoyar a la incipiente Junta Militar. Los informes de espionaje sobre la maquinaria y la represión del régimen proporcionan una cronología clara de qué sabía Washington sobre la campaña de terror del general Pinochet (llevada a cabo tanto en el interior de Chile como en otros países).

Asimismo, los archivos exhumados revelan, con una asombrosa cantidad de detalles, lo que hicieron y dejaron de hacer los funcionarios estadounidenses al conocer tales hechos.

Pinochet: los archivos secretos se sirve de la abundante información contenida en los documentos desclasificados para ofrecer un relato de investigación y desarrollar una historia que sigue siendo objeto de debate. Al mismo tiempo, trata de narrar lo sucedido en Estados Unidos y Chile a través de una selección representativa de documentos extraídos del largo rastro documental dejado por diversos organismos y agencias estadounidenses, desde la Casa Blanca hasta el puesto de operaciones de la CIA en Santiago. Reconstruir toda una historia por medio de la compilación de un centenar de documentos es —reconozcámoslo— imposible. Por razones de espacio me he visto obligado a seleccionar escritos relativamente breves y, en algunos casos, a reproducirlos sólo de manera parcial. El texto, por otra parte, recoge profundas citas de docenas de testimonios decisivos que no han podido ser incluidos. Con todo, el lector puede acceder a la versión íntegra de los documentos que aparecen abreviados en este libro a través de la página del Archivo de Seguridad Nacional en Internet: www.nsarchive.org. Los más ambiciosos podrán explorar un panorama más amplio de testimonios desclasificados sobre Chile consultando el sitio del Departamento de Estado (www.state.gov, en concreto: <http://foia.state.gov/SearchColls/Search.asp>), donde se recogen los veinticuatro mil escritos publicados a raíz del Proyecto de Desclasificación de Chile.

Los documentos son una herramienta esencial a la hora de reconstruir la historia, aunque no siempre revelan todos los aspectos de ésta. Tal vez los que aún están clasificados como secretos —de los cuales no son pocos los que siguen guardándose en Chile— contengan información adicional o aun contradictoria, y quizá haya elementos que ni siquiera se hayan confiado al papel. Siempre que ha sido posible, he tratado de completar y aclarar la información de los documentos con entrevistas realizadas a los estadistas que los elaboraron o leyeron, entre los que se encuentran antiguos vicesecretarios de Estado para Asuntos Interamericanos, altos cargos del Consejo para la Seguridad Nacional especializados en América Latina, varios embajadores y numerosos funcionarios del Departamento de Estado, del CSN, del Ministerio de Justicia y del servicio de inteligencia. También he intentado determinar cuál es la información que permanece escondida en los fragmentos tachados de algunos de los documentos más importantes. En algunos casos —marcados en el texto mediante la inclusión entre corchetes de los datos suprimidos—, el material que se ha eliminado de un documento puede obtenerse de otro. Sin duda todavía quedan secretos por revelar acerca de Chile, pero el número es menor hoy día.

El hecho de que se haya mantenido durante tanto tiempo tal sigilo alrededor de Chile y las relaciones de Estados Unidos con Pinochet da idea, por una parte, de lo controvertido que resulta este pasado, y por otra, de la relevancia que posee para el debate actual y futuro en torno a las intervenciones de Estados Unidos en el extranjero y los fundamentos morales de su política exterior. Los documentos que se analizan en las páginas siguientes constituyen, en esencia, un expediente de atrocidades y responsabilidad que no sólo afecta al general y su régimen, sino también al vergonzoso respaldo prestado por Estados Unidos al derramamiento de sangre provocado por la dictadura. «Uno de los objetivos del proyecto —reza la declaración de la Casa Blanca que acompañó a la publicación de testimonios otrora secretos— es mostrar al público los documentos originales de tal modo que pueda juzgar por sí mismo hasta qué punto la actuación de Estados Unidos socavó la causa de la democracia y los derechos humanos en Chile.» El presente volumen tiene la intención de contribuir a que el lector pueda formar su propio juicio al respecto.